

# COP29

*Op-ed*

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA SOBRE  
LOS ACUERDOS DE LA COP29





# COP29

*Op-ed*

## PERSPECTIVA LATINOAMERICANA SOBRE LOS ACUERDOS DE LA COP29

### COLUMNISTAS:

**Fabrice Lambert**

Centro de Cambio Global UC

**Shauna N. Gillooly**

Centro de Cambio Global UC

**Simón Escoffier**

Centro de Cambio Global UC

**Diego González**

Centro de Cambio Global UC

### EDITOR:

**Juan Fco Figueroa**

Centro de Cambio Global UC

**Abril 2025**

#### CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN:

Centro de Cambio Global UC (CCG-UC), 2025. Perspectiva Latinoamericana sobre los Acuerdos de la COP29. Preparado por Fabrice Lambert, Shauna N. Gillooly, Simón Escoffier y Diego González. Santiago, Chile.

# Tabla de Contenidos

pg.4

**Fabrice Lambert**  
Consejo Académico Asesor

Presenta la evolución del mercado de carbono a lo largo de las COP, comenzando con una descripción de la CMNUCC y el Acuerdo de París, punto de partida del marco regulatorio actual. También discute sobre los desafíos actuales, las lagunas legales, los riesgos sociales y ambientales, así como los nuevos estándares de la COP29 para mejorar la transparencia e integridad de estos mercados.



pg.6

**Shauna N. Gillooly**  
Consejo Académico Asesor

Analiza las brechas entre los acuerdos internacionales de las COP y su aplicabilidad a la escala territorial de cada país mediante la gobernanza nacional. El análisis se complementa con una aplicación de los mercados de carbono en la región de LAC, en donde plantea los desafíos de mitigación para los diferentes países que comparten uno de los mayores sumideros de gas, el Amazonas.







pg.8

### **Simón Escoffier**

Consejo Académico Asesor

Discute sobre los desafíos de la sociedad civil en la participación política en torno a la acción climática. Se plantea la dualidad de la COP: reafirmar compromisos climáticos, pero excluyéndolos de la toma de decisiones. Además, se analiza cómo el marco ACE promete participación, pero sin una transferencia real de poder. Para una gobernanza climática eficaz, es crucial empoderar a los actores de base con protección institucional, considerando los desafíos en América Latina.

pg.10

### **Diego González**

Coordinador de Proyecto Senior

Los acuerdos alcanzados durante la COP están siendo cuestionados, con debates sobre las diversas controversias que la rodearon. Por un lado, el papel del anfitrión y cómo esto generó críticas sobre la coherencia del sistema de negociación climática. Por otro lado, el fondo anual de 1.300 millones de dólares para países vulnerables, donde el compromiso de 300.000 millones de dólares se considera insuficiente. La cumbre reflejó la dificultad de equilibrar la reducción de emisiones con la dependencia económica de los combustibles fósiles.



# Glosario



**AEC/ACE:** Acción para el Empoderamiento Climático

**COP:** Conferencia de las Partes

**CMNUCC:** Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

**UAE:** Emiratos Árabes Unidos

**EMC:** Estado Mayor Central. Federación de disidentes de la FARC

**FARC:** Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

**GEI:** Gases de Efecto Invernadero

**INGEI:** Inventario de GEI

**LAC:** Latino América y el Caribe

**NDC:** Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional

**UN:** Naciones Unidas

**OGA** Objetivos Globales de Adaptación

**ONG:** Organización No Gubernamental

**Partes:** Corresponde a los 198 países que han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

**PIB:** Producto Interno Bruto

**UE:** Unión Europea

# Introducción

---

La 29ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP29) se celebró entre el 11 y el 22 de noviembre de 2024 en Bakú, Azerbaiyán, marcando tres décadas de cumbres climáticas desde la primera COP en Berlín en 1995 (EFE: verde, 2024a). Con la participación de 195 países, aproximadamente 90 líderes mundiales y una representación femenina del 40 % (CarbonBrief, 2024a), esta edición estableció nuevos compromisos en financiamiento climático que incluyeron al sector privado, actualizó las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para el período 2025–2035, abordó los Objetivos Globales de Adaptación (OGA) y avanzó en la implementación del Artículo 6.4 del Acuerdo de París sobre mercados de carbono. Si bien estos logros reflejan un compromiso internacional frente a la necesidad urgente de una acción más ambiciosa y coordinada ante los desafíos climáticos globales, no constituyen soluciones definitivas. Deben ser analizados, discutidos y sometidos a escrutinio para identificar debilidades y proponer caminos de mejora.

Por un lado, estos acuerdos deben ponerse en práctica y enfrentar uno de los primeros obstáculos con que se encuentran los países al intentar avanzar en sus compromisos climáticos: implementarlos a nivel nacional (gobernanza local). La literatura académica ha abordado las necesidades (Tam et al., 2019; Percival et al., 2017) y brechas (Rezvi et al., 2024) en la alineación de la legislación nacional con los marcos internacionales para desarrollar enfoques comunes. Paralelamente, han surgido debates sobre la posible necesidad de establecer mecanismos de responsabilidad frente al incumplimiento de obligaciones internacionales por parte de los Estados Parte (Nukusheva et al., 2020). Estas discusiones evidencian la doble naturaleza de algunos acuerdos climáticos internacionales: por un lado, imponen exigencias no vinculantes pero tampoco diferenciadas; por otro, enfrentan las capacidades reales de cada Parte para cumplir con dichas exigencias.

En este contexto, la implementación de los mercados de carbono adquiere creciente relevancia, especialmente por tratarse de una herramienta clave para alcanzar la neutralidad de carbono al 2050 y mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C, tal como establece el Acuerdo de París. En esta cumbre se acordó un nuevo conjunto de estándares internacionales para el mercado de carbono. Estos nuevos estándares están diseñados para garantizar la integridad y transparencia de los mercados, evitando problemas como la doble contabilidad de reducciones de emisiones o el “lavado verde” por parte de empresas que utilizan créditos fraudulentos o sin valor, problemas que afectaban al sistema anterior. Sin embargo, persisten interrogantes clave sobre la efectividad y aplicabilidad de estos nuevos estándares, así como sobre sus posibles impactos sociales y ambientales en comunidades locales e indígenas.

The image shows a close-up of the COP29 logo, which includes the text "COP29", "Baku", and "Azerbaijan" in white on a blue background. The logo is partially obscured by a red and green ribbon-like graphic.

COP29  
Baku  
Azerbaijan

En la práctica, para implementar el mercado, se espera que cada país cuente con un Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) actualizado y con proyectos nacionales público-privados que faciliten el comercio de créditos de carbono con otros países. Sin embargo, existen diversas brechas que obstaculizan una implementación rápida y eficaz. En particular, en América Latina y el Caribe (LAC), los países carecen de suficiente capacidad estatal en áreas como la fiscalización legal y la supervisión regulatoria, lo que limita su capacidad para establecer un mercado de carbono estable (PNUD, 2022).

Aunque LAC no es una gran fuente de emisión de GEI, sufre graves consecuencias del cambio climático y, por ello, busca ser parte de la solución mediante el fortalecimiento de su resiliencia futura. Para ello, varios países han asumido compromisos ambiciosos de reducción de emisiones—en algunos casos, incluso superiores al promedio mundial (PNUD, 2022)—que esperan lograr mediante programas de control de deforestación, iniciativas de reforestación, esfuerzos de transición energética y estrategias de economía circular. Sin embargo, existe una falta de financiamiento para implementar estas medidas (PNUD, 2022). Además, la sociedad civil cumple un rol fundamental para lograr estos y otros compromisos. Como agente clave en la lucha contra el cambio climático desde hace años, la sociedad civil ha buscado formas de participar en la toma de decisiones tanto a nivel nacional como internacional.

En este sentido, un tema clave que sigue sin resolverse en las COP es el empoderamiento de la sociedad civil en la gobernanza climática. Aunque el marco de Acción para el Empoderamiento Climático (AEC) busca fortalecer la participación pública en la toma de decisiones, en la práctica limita a los actores de la sociedad civil a un rol consultivo, sin otorgarles verdadera influencia en la formulación de políticas. En América Latina, esto tiene consecuencias directas: mientras crece el negacionismo climático entre sectores políticos y empresariales poderosos, los activistas ambientales enfrentan violencia, criminalización y falta de recursos para incidir en el debate. La región necesita mecanismos que no solo integren a la sociedad civil en los acuerdos, sino que también les proporcionen herramientas efectivas para influir en ellos.

Estos temas plantean la pregunta de si la COP29 puede considerarse un avance o un retroceso en la acción climática. Los temas aquí presentados—relacionados con las capacidades reales de gobernanza local, la implementación de mercados de carbono, el rol y los desafíos de la sociedad civil, y las decisiones tomadas en la COP29 para implementar acuerdos internacionales—serán analizados por cuatro expertos del Centro de Cambio Global UC, con foco en su aplicabilidad a la región.





United Nations  
Climate Change



COP29  
Baku  
Azerbaijan



United Nations  
Climate Change



COP29  
Baku  
Azerbaijan

“

No es fácil definir si la COP29 fue histórica en sus resultados o si los hitos alcanzados son realmente un avance en la diplomacia climática.

# MERCADO DE CARBONO

## HISTORIA, PROGRESO Y DESAFÍOS

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es un tratado internacional histórico establecido en 1992 durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Su objetivo principal es estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera para prevenir interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Un total de 198 países son partes de la CMNUCC y están comprometidos en abordar el cambio climático mediante diversos mecanismos, incluidos la adaptación, la mitigación y el apoyo financiero. En 2015, las partes firmaron el Acuerdo de París, cuyo objetivo es mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C por encima de los niveles preindustriales y lo más cerca posible de 1.5 °C.



**Fabrice Lambert**  
Consejo Académico Asesor

Alcanzar la meta del Acuerdo de París implica cambios significativos en el estilo de vida moderno basado en combustibles fósiles desde principios del siglo XX. Los países desarrollados deben reducir sus emisiones, mientras que los países en desarrollo necesitan progresar evitando la emisión de grandes cantidades de GEI durante el proceso. En la práctica, las diferentes capacidades de los países para contribuir a la mitigación del cambio climático mediante medios tecnológicos y/o basados en la naturaleza requieren una solución global unificada. Los mercados de carbono dentro del Artículo 6.4 del Acuerdo de París son mecanismos que permiten a países y empresas comerciar créditos de carbono, que representan una reducción o eliminación de emisiones de GEI. Estos mercados incentivan la reducción de emisiones al poner un precio al carbono y fomentar inversiones en tecnologías y prácticas de baja emisión. Podrían proporcionar una manera efectiva para que las regiones con altas emisiones compensen sus emisiones capturando carbono en otras partes del planeta.

El primer sistema de comercio de carbono se estableció en 2001 como parte del Protocolo de Kioto. Su objetivo era ayudar a los países industrializados a cumplir sus objetivos de reducción de emisiones mediante la inversión en proyectos de reducción de emisiones en países en

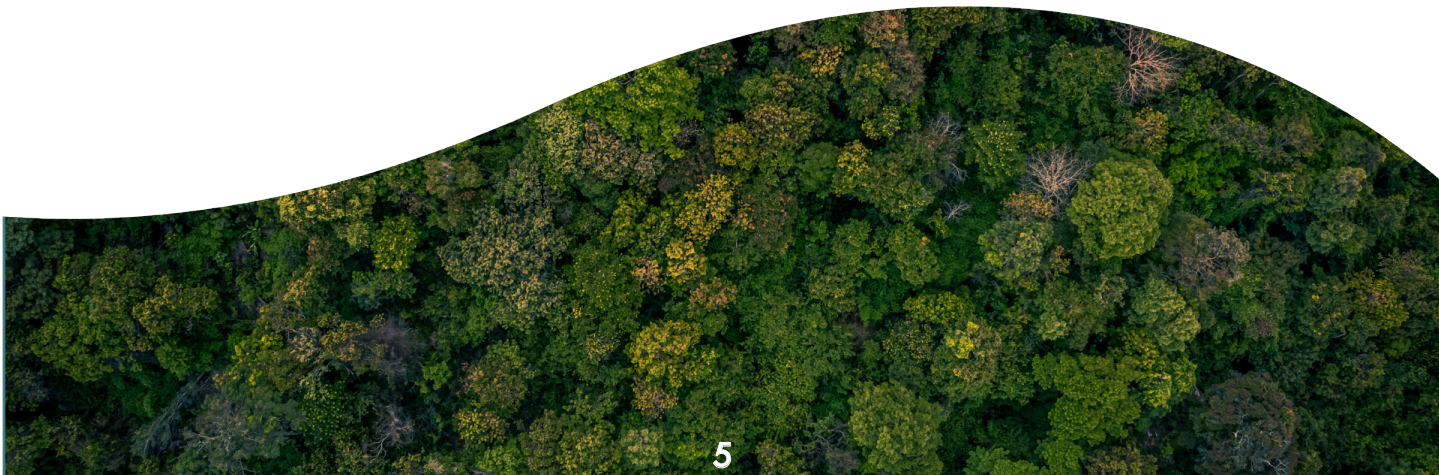




desarrollo. Sin embargo, ha recibido fuertes críticas por cuestiones como la distribución desigual de los proyectos, la preocupación por la adicionalidad de algunos proyectos y la integridad ambiental general de los créditos generados.

Para abordar estos problemas, durante la COP29 celebrada en Azerbaiyán, se acordó un nuevo conjunto de estándares internacionales. Estos nuevos estándares están diseñados para garantizar la integridad y transparencia de los mercados, evitando problemas como el doble conteo de reducciones de emisiones o el lavado verde por parte de empresas que utilizan créditos falsos o sin valor, problemas que plagaron el sistema anterior. Se espera que la operacionalización de estos mercados de carbono dirija recursos sustanciales hacia los países en desarrollo y ayude a lograr reducciones de emisiones a un menor costo.

Por lo tanto, el desarrollo de mercados de carbono sólidos se considera una herramienta clave en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Sin embargo, permanecen algunas preguntas clave sobre la efectividad de los nuevos estándares. Además de preocupaciones sobre lagunas legales, el dominio del mercado por parte de naciones y corporaciones ricas, y la permanencia del almacenamiento de carbono, una fuente importante de incertidumbre sobre los impactos sociales y ambientales de dicho mercado. Aunque estos temas se mencionan específicamente en el acuerdo, el lenguaje es muy breve y vago, lo que resulta en riesgos sustanciales para las comunidades locales e indígenas. En América Latina, donde vive un número considerable de poblaciones locales e indígenas, los efectos sociales y ambientales de los nuevos estándares de los mercados de carbono siguen siendo inciertos.



# ACUERDOS INTERNACIONALES VS GOBERNANZA LOCAL

Como programa, el Mercado de Carbono propuesto en el Artículo 6 del Acuerdo de París, asume que todos los gobiernos nacionales que participan del Acuerdo y la COP tienen control total de su territorio nacional, incluyendo las capacidades de detener la deforestación y minería ilegal.

Esta suposición es entendible desde el punto de vista de una institución internacional—la soberanía de los gobiernos nacionales, como un concepto, es una de las suposiciones fundamentales de la estructura de gobernanza global, incluyendo los inicios de las organizaciones como las Naciones Unidas (Barnett, 1995; Slaughter, 2005). El concepto de la soberanía de un estado, en su nivel fundamental y básica, significa que un gobierno nacional tiene un monopolio de la violencia y fuerza en su territorio nacional, y control de sus recursos naturales (Weber 1946).

El gran problema político vinculado a las estructuras de gobernanza global, desde sus inicios, es el balance y la negociación entre el concepto de la soberanía por los gobiernos nacionales y los logros en la arena de cooperación internacional, particularmente frente a problemas como el cambio climático, que, por su carácter, es un problema global y transfronterizo. Este es el mismo reto que instituciones como la COP enfrentan constantemente. En general,

las organizaciones de gobernanza global asumen que los estados que participan en este nivel internacional tienen una soberanía tradicional, incluso cuando sabemos que un estado o un gobierno particular no tiene el control de su territorio nacional.

La realidad es que el mercado de carbono propuesto en el Acuerdo de París sigue esta misma suposición: los estados tienen control de su territorio y sus recursos naturales. Sin embargo, sabemos que, en muchas regiones del mundo, incluso en ecosistemas claves que actúan como sumideros de carbono (por ejemplo, la región Amazónica en América Latina), los gobiernos nacionales no tienen control de su territorio ni sus recursos naturales.

En particular, en la cuenca Amazónica de Colombia el grupo Estado Mayor Central (EMC), un grupo de disidentes ex-FARC, ha



**Shauna Gillooly**  
Consejo Académico Asesor



usado su control sobre la deforestación ilegal en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta como una herramienta de negociación con el gobierno nacional de Colombia (Mongabay, 2024a).

En la zona Amazónica de Brasil en 2022, el periodista Dom Phillips junto al investigador y líder indígena Bruno Pereira, fueron asesinados por una organización criminal, con el involucramiento de individuos que participan en la caza y pesca furtiva en la misma región (Mongabay, 2024b; The Guardian, 2024). En Perú, la minería ilegal se ha mantenido y con un gran impacto en los ecosistemas y fuentes de agua importantes para el país, con efectos profundos a su vez en la salud humana (NPR, 2024).

Zonas como la región amazónica, dada su relevancia ecológica, también presentan desafíos únicos para las iniciativas de gobernanza regional y global, especialmente en América Latina. Pero si estas iniciativas de gobernanza global, como la COP y el Acuerdo de París, realmente quieren trabajar

y atender los cambios urgentes que los problemas del cambio climático exige, es necesario sensibilizarlas a la realidad de las distintas regiones y zonas del mundo. Esta sensibilización también va a necesitar consideraciones y soluciones excepcionales. Estos tipos de problemas no van a estar resueltos por propuestas de soluciones únicas.



Puedes leer más sobre esta nota  
al visitar la columna publicada en  
[OpenDemocracy](#)



# COP Y SOCIEDAD CIVIL: UN DIÁLOGO SIN INFLUENCIA REAL EN AMÉRICA LATINA

**E**n cada cumbre de la COP, los gobiernos reafirman su compromiso con la acción climática global, pero el mundo sigue peligrosamente alejado del cumplimiento de sus metas climáticas. Mientras los responsables políticos debaten sobre la reducción de emisiones y los mecanismos de financiamiento, un pilar crucial de la gobernanza climática—el empoderamiento de la sociedad civil—sigue siendo relegado. El [marco de Acción para el Empoderamiento Climático](#) (ACE, por sus siglas en inglés), diseñado para dotar a la ciudadanía y la sociedad civil de herramientas para impulsar la acción climática, promete inclusión, participación y conciencia. Pero la participación sin poder es solo una performance.

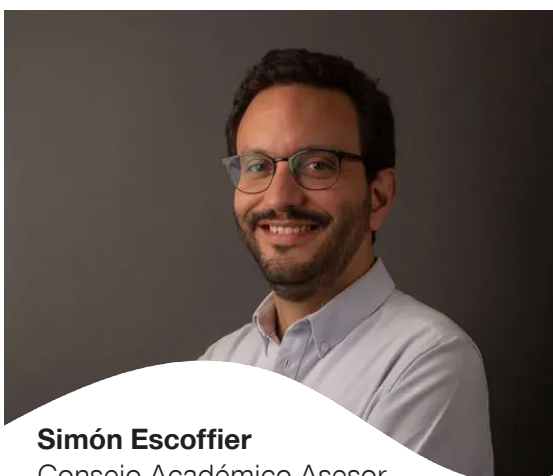
Si hablamos en serio sobre acción climática, debemos reconocer que los gobiernos no son los únicos—ni necesariamente los mejores—impulsores de políticas climáticas urgentes. Las victorias climáticas más transformadoras han venido de la sociedad civil presionando desde abajo. Sin embargo, en lugar de amplificar el poder de

estos actores, la ACE les ofrece discursos en lugar de influencia, talleres en lugar de recursos y visibilidad en lugar de poder estructural.

## Una Concepción Elitista de la Política

En la COP29, Ingmar Rentzhog, director ejecutivo de “We Don’t Have Time”, [reventó globos](#) que representaban emisiones de metano para mostrar a los responsables políticos dónde enfocar los esfuerzos de mitigación. Su analogía—contraponiendo el metano con los globos de dióxido de carbono que flotan fuera del alcance—fue simple y efectiva. Ejemplificó la mentalidad dominante de la COP: traducir el conocimiento científico y técnico en mensajes digeribles para los responsables políticos y líderes corporativos. Pero ¿quién decide qué conocimiento se prioriza? ¿Y quién tiene el capital político para actuar en consecuencia?

La política puede definirse como la capacidad de impactar a la comunidad en la que vivimos mediante un proceso de legitimación colectiva de ideas. A través de la política, estas ideas se difunden dentro de nuestras comunidades y se transforman en valores, ideales, ideologías, políticas públicas o identidades. Participar en política requiere capital político, es decir, los recursos tangibles e intangibles mediante los cuales un actor obtiene validación colectiva para movilizar a otros. En otras palabras, tanto los políticos como los actores de la sociedad civil que buscan construir legitimidad para impulsar cambios de adaptación climática en sus países y comunidades necesitan algo más que ayuda financiera para alcanzar sus objetivos. Requieren habilidades, conocimientos, redes y medios económicos para participar en disputas locales sobre decisiones democráticas que moldean la acción climática.



**Simón Escoffier**  
Consejo Académico Asesor

Con el objetivo de fomentar el compromiso público con la acción climática, el ACE es un marco que promete contrarrestar las nociones elitistas de la política que prevalecen en la COP. ACE está establecido bajo el [Artículo 6 de la CMNUCC](#) y el [Artículo 12 del Acuerdo de París](#). Reconoce que la educación, la concienciación y la participación son esenciales para alcanzar las metas climáticas al fomentar una respuesta social amplia ante el cambio climático.

A pesar de su compromiso con la participación amplia, el [ACE no transfiere efectivamente el poder a los actores de base](#), ni les proporciona el capital político necesario para desafiar el statu quo. En cambio, refuerza la concepción elitista de la política de la COP—una en la que el objetivo principal es traducir la experiencia científica y técnica en recomendaciones de política para las autoridades, en lugar de permitir que la sociedad civil influya en la toma de decisiones a través de la movilización social.

Este enfoque enmarca al público y a los líderes de la sociedad civil como una audiencia, no como agentes políticos. Se espera que la sociedad civil esté [educada y comprometida](#), pero solo de una forma que respalde la adopción de políticas por parte de los gobiernos—no de una forma que las cuestione, dispute o transforme desde abajo.

### Consecuencias en América Latina

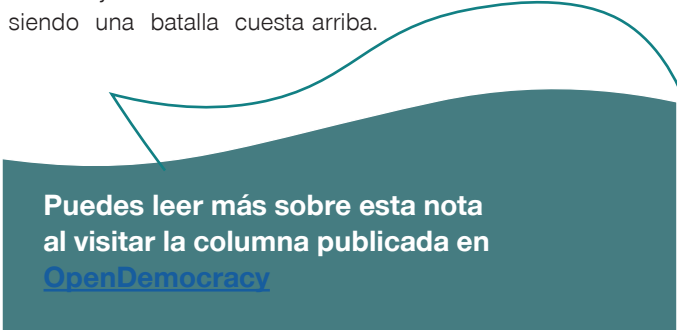
Mientras los cambios necesarios se discuten a nivel internacional, las medidas para empoderar a los aliados de base de la sociedad civil en el ámbito nacional siguen siendo insuficientes, y la lucha climática enfrenta dos retrocesos clave en América Latina: el creciente auge del negacionismo climático y el aumento de las amenazas contra los defensores ambientales.

Aunque el escepticismo climático sigue siendo una [visión minoritaria en América Latina](#), el negacionismo está ganando terreno entre actores poderosos, reconfigurando las políticas climáticas nacionales. En Brasil, Jair Bolsonaro [atacó la ciencia climática](#), despidió a investigadores y suprimió datos sobre deforestación. En Argentina, el presidente Javier Milei calificó el cambio climático como una

“[inversión socialista](#)”, se retiró de la COP29 y desmanteló instituciones ambientales. En Chile y Colombia, sectores de derecha promueven la desconfianza en los acuerdos climáticos globales, debilitando los compromisos de sus gobiernos con el Acuerdo de París. Mientras los líderes negacionistas y las corporaciones cuentan con recursos, redes y acceso directo al poder, la sociedad civil carece del capital político para influir en las batallas climáticas locales.

Los defensores ambientales latinoamericanos enfrentan una violencia creciente, con gobiernos y empresas que utilizan el acoso, la vigilancia y la criminalización para silenciarlos. En Argentina, el gobierno de Milei ha reprimido a grupos indígenas que se oponen al despojo de tierras, criminalizando el activismo climático. En El Salvador, Nayib Bukele ha instrumentalizado a las fuerzas de seguridad del Estado contra los defensores ambientales, [utilizando detenciones arbitrarias](#) e intimidación para silenciar a los críticos de las políticas extractivistas. En toda la región, los asesinatos de defensores ambientales han alcanzado niveles alarmantes, convirtiendo a América Latina en la región [más peligrosa para el activismo climático](#). Sin embargo, el ACE no ofrece protecciones concretas ni herramientas para responsabilizar a los gobiernos.

Sin un cambio significativo en el enfoque del ACE—uno que priorice dotar a los actores de base con las habilidades, recursos y espacios institucionales para participar como partes interesadas en igualdad de condiciones en la gobernanza climática—la sociedad civil seguirá políticamente aislada, y la lucha por la justicia climática en América Latina y el resto del Sur Global continuará siendo una batalla cuesta arriba.



Puedes leer más sobre esta nota  
al visitar la columna publicada en  
[OpenDemocracy](#)

# COP29 ¿PROGRESO O RETROCESO EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA?

No es fácil definir si la COP29 fue histórica en sus resultados, o si los hitos alcanzados son realmente un avance en la diplomacia climática, esto no solo por las decisiones que allí se adoptaron, sino también por la controversia que rodeó su presidencia, en manos de Azerbaiyán. Conocido por su posición como productor prominente de petróleo y gas, Azerbaiyán fue objeto de críticas tanto por su papel de liderazgo en la COP como por sus cuestionables registros en derechos humanos y gobernanza.

En un discurso durante la cumbre, el liderazgo de Azerbaiyán describió a los combustibles fósiles como “un regalo de Dios”, reafirmando cómo su economía estaba intrínsecamente ligada a la explotación de estos. De hecho, gran parte de su Producto Interno Bruto (PIB) depende de esta industria (aprox 50%), una realidad compartida con el país que fue anfitrión de la anterior COP (EAU). Esta dependencia económica de Azerbaiyán y la de otros países en desarrollo y menos desarrollados a los combustibles fósiles, sin embargo, exacerba la desigualdad social y dificulta la implementación de políticas de descarbonización.

El caso de Azerbaiyán también evidencia un problema mayor: la falta de compromiso tangible de numerosos Estados para cambiar sus matrices energéticas. La transición hacia economías bajas en

carbono requiere inversiones significativas y una voluntad política que, en muchos casos, parece ausente. Esta situación, que puede ser por decisión política, o incapacidad económica y técnica, coloca a los países en desarrollo en una posición especialmente vulnerable, ya que deben afrontar no solo los impactos del cambio climático, sino también el costo económico y social de abandonar los combustibles fósiles. Para Azerbaiyán, como productor de petróleo y gas natural, esto probablemente implicaría una significativa reducción de su PIB, una transformación radical de su matriz productiva y el riesgo de una convulsión política y económica.

El escenario que se perfiló para la COP29 fue preocupante. La presidencia de Azerbaiyán dificultó las negociaciones, dado el conflicto inherente entre los intereses de los grandes productores



**Diego González**  
Coordinador de Proyecto Senior

de combustibles fósiles y la urgencia de alcanzar acuerdos climáticos ambiciosos. Además, la desigualdad estructural entre países ricos y pobres — agudizada por la falta de financiamiento para la adaptación y mitigación— llevó a una nueva ronda de negociaciones fallidas. El comienzo de las conversaciones, los países discutieron la transferencia de \$1.3 billones anuales a las naciones más afectadas por el cambio climático hasta 2035 para avanzar en la transición verde.



Las naciones más ricas acordaron transferir \$300 mil millones anuales, que fue catalogado de manera negativa por distintos personeros de países, como la Sra. Chandni Raina, asesora del Departamento de Asuntos Económicos de India, que declaró en la plenaria al fondo recaudado como “insignificante y no algo que permita una acción climática efectiva. Desde este punto de vista, los países más vulnerables necesitan apoyo financiero y tecnológico para superar los obstáculos de la descarbonización, mientras que los grandes emisores deben comprometerse a transformar sus economías de manera equitativa, sin embargo, una vez más, la negociación no logro alinear esta meta en resultados concretos.

La COP29 fue otra prueba de fuego más para el multilateralismo climático. Enfrentar los intereses de los productores de combustibles fósiles, como Azerbaiyán, y equilibrar las necesidades de desarrollo de los países más pobres con la urgencia de reducir emisiones. No me es posible determinar si fue un éxito o un fracaso, pero me inclino más por la segunda.





## Referencias



- Barnett, Michael. (1995). The new United Nations politics of peace: From juridical sovereignty to empirical sovereignty. *Global Governance*, 1(1), 79-97
- CarbonBrief. (2024). Analysis: Which countries have sent the most delegates to COP29?. Recuperado de: <https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-have-sent-the-most-delegates-to-cop29/>
- EFE: verde. (2024). De Berlín a Bakú: Tres décadas de cumbres climáticas hasta la COP29 para salvar al planeta. Recuperado de: <https://efeverde.com/tres-decadas-de-cumbres-climaticas-hasta-la-cop29-para-salvar-al-planeta/>
- Mongabay. (2024a). In Colombia, guerrilla groups decide the fate of the Amazon. Recuperado de: <https://news.mongabay.com/2024/10/in-colombia-guerrilla-groups-decide-the-fate-of-the-amazon/>
- Mongabay. (2024b). Brazil police identify fish trader behind Dom Phillips and Bruno Pereira killings. Recuperado de: <https://news.mongabay.com/short-article/brazil-police-dom-and-bruno-killings/>
- NPR. (2024). Gold mining reduced this Amazon rainforest to a moonscape. Now miners are restoring it. Recuperado de: <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2024/04/02/1231873144/gold-mining-reduced-this-amazon-rainforest-to-a-moonscape-now-miners-are-restori>
- Nukusheva, A., Ilyassova, G., Rustembekova, D., Zhamiyeva, R., & Arenova, L. (2021). Global warming problem faced by the international community: international legal aspect. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 21, 219-233.
- Percival, R. V., Schroeder, C. H., Miller, A. S., & Leape, J. P. (2017). Environmental regulation: Law, science, and policy. New York City: Wolters Kluwer Law & Business
- Rezvi, M. R., Shahriar, F., & Islam, Z. (2024). COP-28 & South Asian Countries: Policy Challenges and Policy Options. *Sustainability and Climate Change*, 17(4), 231-244. DOI: <http://dx.doi.org/10.1089/scc.2024.0083>
- Slaughter, A. M. (2005). Security, solidarity, and sovereignty: The grand themes of UN reform. *American Journal of International Law*, 99(3), 619-631. DOI: <https://doi.org/10.2307/1602294>
- Tam, V. W. Y., Le, K. N., Tran, C. N. N., & Illankoon, I. M. C. S. (2019). A review on international ecological legislation on energy consumption: Greenhouse gas emission management. *International Journal of Construction Management*, 1, 1-12. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/15623599.2019.1576259>
- The Guardian. (2024). Dom Phillips and Bruno Pereira: murder charge dropped against one of three suspects. Recuperado de: <https://www.theguardian.com/world/2024/sep/18/dom-phillips-bruno-pereira-murder-charge-dropped-one-of-three-suspects>
- UNDP. (2022). The challenges of climate mitigation in Latin America and the Caribbean: some proposals for action. UNDP Lat. Am. Caribb. policy documents Ser. UNDP LAC PDS No, 40.
- Weber, M. (1946). Bureaucracy. In H. H. Gerth & C. Wright Mills (Eds.). *From Max Weber: Essays in sociology* (pp. 196-244). New York, NY: Oxford University Press.







# COP29

Baku  
Azerbaijan



**Centro UC**  
Cambio Global

 **@CambioGlobalUC**

 **@CambioGlobalUC**

 **Centro de Cambio Global UC**

 **cambioglobal.uc.cl**